

El gobierno de pentapartidos agudiza los problemas italianos

Daniilo TRELLES, corresponsal

MADRID, 21 de septiembre. ¹⁸⁶ Si la creación del gobierno de pentapartidos en Italia (Democracia Cristiana, Partido Socialista, Republicano, Liberal y Socialdemócrata) constituyó en su origen un paso en falso acerca del papel que deben jugar los partidos políticos en un proceso democrático, su continuación a través de una fórmula que vulnera principios básicos de la propia constitución, configura riesgos cuya gravedad es imposible ocultar.

En un país tan proclive por una extraña estructura del poder, donde los estamentos mafiosos, la iglesia, los servicios secretos y la masonería, han tenido una influencia directa en los asuntos de estado en los últimos 40 años, una flexión de principios constitucionales abre una vía sumamente peligrosa para el futuro del propio sistema democrático.

Dos constancias parecen inevitables en el análisis de la situación que emerge luego de la creación del nuevo gobierno de pentapartido: 1) la crisis política no se resuelve con la formación del nuevo gobierno; 2) La prórroga del gobierno Craxi no significa sino el fracaso de una política alejada de los problemas reales del país, en la que lo único que cuenta es la lucha por el poder de los dos grandes partidos de la coalición: la Democracia Cristiana y los socialistas.

Como se sabe, la crisis política que se abriera con la renuncia de Craxi en el anterior gobierno, se resolvió tras un acuerdo en el que los socialistas ocuparan la presidencia del gobierno con la reelección de Craxi en una primera etapa que finaliza en marzo del año próximo, tras lo cual el cargo de primer ministro pasará a ser ejercido por un democristiano.

En esta puja por el reparto del poder, los problemas reales del país no han estado presentes. El gobierno de pentapartidos se construye en torno a una fórmula que contempla una convergencia de conveniencias políticas con un único objetivo: un acuerdo renovado para dar vida a un campo gubernativo, delimitado y cerrado, en cuyo interior desarrollar en substancia la lucha política por el control del gobierno del país, sin tener en cuenta el potencial de alternativas que se ofrecían.

Este acuerdo se ha movido no en el campo de la renovación de la sociedad italiana, sino en el plano de una preeminencia de la fórmula neoliberal, propia en particular de las corrientes más conservadoras de la Democracia Cristiana, que se expresan a través del ataque a las condiciones de los trabajadores y una serie de golpes al estado social, entre la reestructuración y distribución del rédito en favor de las capas privilegiadas económicamente.

El resultado no ha sido una atenuación de los males del país, sino un agravamiento de la desocupación y una seria crisis de las finanzas públicas.

Todo esto ha permitido una recuperación de la Democracia Cristiana en el sistema público y un envalentonamiento de sus pretensiones de erigirse como fuerza hegemónica de un sistema político normalizado. Contemporáneamente reproponen el pentapartido como alianza estratégica y reivindica el derecho de la DC a alternar en el poder para la guía del gobierno.

Es esta la consecuencia del insuceso de la estrategia socialista. La falta de un crecimiento de su propia fuerza electoral y la fracasada convergencia del polo laico-socialista, derivan no sólo en una sobrevaloración de las posibilidades que les concede un nuevo arribo a la presidencia del consejo, sino, sobre todo, en los límites de toda la línea política que se ha mantenido. De un lado, una línea de contraste de ruptura con la izquierda, que se refleja no sólo a través de la política económica, sino que aparece expresada agresivamente, con la cancelación de las alianzas que habían mantenido en las juntas provinciales con los comunistas. Todo esto favoreciendo, por un lado, las posiciones de la DC que ha ganado considerable terreno gracias a esta postura, y por otro, sosteniendo una política económica y social en contradicción con los principios reformistas que han proclamado hasta ahora.

Se ha insistido desde la dirección socialista que la solución del pentapartido otorgaba las mejores posibilidades para la estabilidad y la gobernabilidad del país. Pero el gobierno a término de los socialistas y el pasaje concertado de estos poderes a la Democracia Cristiana hasta fines de 1988, no son solamente hechos insólitos y contrastantes con el orden constitucional, sino exactamente lo contrario de la estabilidad y la gobernabilidad, como se proclama, para justificar el acuerdo.

Un gobierno que sufre desde el comienzo el impacto de las limitaciones del tiempo por el recambio pactado del poder, que ahora está oficialmente disminuido en sus prerrogativas, y que además es provisorio por el acuerdo, no podrá por cierto gozar del vigor y de la iniciativa deseable y necesaria para tomar compromisos sobre los grandes problemas del país.

Si se examina el esquema trazado por los cinco secretarios generales del pentapartido para los veinte meses de gobierno, se percibe muy claramente que este programa ha dejado a un lado los problemas más graves y urgentes: el déficit público, los fenómenos recesivos, el problema del paro, la reforma institucional y la de la escuela, con lo que se confirma la sospecha de que los compromisos contraídos, inhabilitan cualquier medida que tienda a resolver las cuestiones vitales que afectan hoy la situación de Italia.

El acuerdo entre un grupo de partidos para la formación de un gobierno a término preestablecido y por motivaciones constitucionalmente irrelevantes, expresan una concepción del Estado reducida al patrimonio de un grupo de partidos y representa una lesión grave a la letra y al espíritu de la carta constitucional: un gobierno vive y actúa por la confianza que le otorgan las cámaras y cesa sólo cuando este apoyo se quiebra.

No se puede disimular que los cinco partidos han realizado un paso delicado desde el punto de vista constitucional y no lo han hecho con la preocupación de resolver ninguno de los problemas acuciantes para la vida del país, sino simplemente para resolver un pleito por el dominio del poder.

La constitución del nuevo gobierno de pentapartido no puede en consecuencia valorarse como un aporte positivo para la evolución de la situación italiana.